

EL MERCURIO

FUNDADO POR AGUSTIN EDWARDS

Violencia Política

El Gobierno militar enfrenta una coyuntura muy difícil, planteada por la generalizada reacción de la ciudadanía frente al asesinato de tres militantes comunistas.

Una aparente calma movió a algunos a pensar que el estado de sitio era un instrumento suficiente para apaciguar los ánimos y brindar al nuevo equipo político el marco propicio para la transición hacia la democracia. Sin embargo, las tensiones latentes y la polarización quedaron brutalmente de manifiesto con el atentado que costó la vida a dos uniformados en Concepción, el 25 de marzo.

El día 27 la tranquilidad colectiva se vio nuevamente quebrantada por diversos hechos, en especial por dos destructoras explosiones en la capital. La inquietud aumentó en la mañana del 29, al conocerse el secuestro, con atemorizadora espectacularidad, de varios dirigentes de izquierda, tres de los cuales fueron encontrados asesinados al día siguiente, lo cual, a su vez, provocó disturbios en la Catedral metropolitana.

La creciente barbarie de esta espiral violentista ha conmovido a la opinión pública de todas las tendencias hasta un extremo que no puede ser desestimado por las autoridades. Estas, para preservar su propio prestigio y el de las instituciones que representan, para velar por la obra de renovación nacional a que

se comprometieron en 1973 y evitar al país el riesgo de futuros vuelcos de consecuencias devastadoras, deberán ahora llevar al máximo su celo para que estos crímenes no queden sin entero esclarecimiento y debida sanción. De lo contrario, por existir casos en que tal elucidación no tuvo lugar, habrá interés en hacer recaer sobre el Gobierno el peso moral y político de estos delitos, lo que podría facilitarse por el impulso que el rumor y la duda inevitablemente cobrarían si no existiese amplia información sobre estos hechos y las medidas adoptadas para su clarificación.

El Gobierno así lo ha advertido, según trascendió de las reuniones de ayer, en las que el Presidente de la República instó a las jefaturas correspondientes a agilizar las pesquisas, sin interferencias de ningún género.

No cabe descartar la hipótesis de un portavoz oficial según la cual las circunstancias indican que se trata de desprestigiar o inculpar al Gobierno. Sin embargo, tal aseveración no basta para restablecer la tranquilidad pública. Interesa no sólo al Gobierno sino al Estado mismo clarificar los hechos más allá de toda duda, pues si una fidedigna investigación estableciese que efectivamente los autores son extremistas marxistas ejecutando un sutil plan desestabilizador, sería preciso examinar qué aspectos del sistema están fa-

llando y ponen en peligro la supervivencia del estado de derecho en Chile.

El Jefe de la Zona en Estado de Emergencia declaró acertadamente el día 28 que el combate antiterrorista "no es una lucha del Gobierno; es una lucha del país contra el terrorismo, porque éste no sólo afecta a un grupo". Escasas horas después el país cobró amarga conciencia de ello. Se percibe la creciente sensación de que la seguridad de las personas se ha tornado inexistente. Surgen interrogantes en torno a la eficacia de los mecanismos de prevención, pues no resulta comprensible, por ejemplo, que, bajo el imperio simultáneo de los estados excepcionales de sitio, emergencia y catástrofe, puedan circular impunemente, en horas diurnas, automóviles no identificados y proceder a cometer secuestros a mano armada, sin que las entidades competentes puedan impedir crímenes como los que hoy ensombrecen ominosamente las sentidas esperanzas de paz nacional.

Si las autoridades desean mover al país a la lucha antiterrorista, urge la necesidad de que las investigaciones judiciales y policiales revelen con absoluta nitidez el origen de los últimos sucesos y se logre la plena identificación y castigo a sus autores. Sólo así se devolverá la tranquilidad a la inmensa mayoría del país que adhiere y defiende los valores de la cultura occidental y cristiana.